



Estimadas/os copartidarias/os,

„Die Linke“ es un partido hermano que desde su fundación se ha solidarizado con el Polo Democrático Alternativo.

La parlamentaria Heike Hänsel ha sido una de las promotoras de las misivas enviadas al gobierno colombiano solicitándole el respeto a la protesta, la libre expresión, derechos anclados en la constitución colombiana.

Die Linke ha estado acompañando las protestas de la colombianidad en diferentes ciudades de Alemania. La resolución que les hacemos llegar en anexo (versión original y traducción al español) es solo una muestra del compromiso solidario de Die Linke con la Colombia en Resistencia.

En el Polo Democrático Alternativo Internacional seguimos trabajando estableciendo lazos solidarios con la comunidad internacional.

Saludo cordial

Polo Democrático Alternativo Internacional

Einstimmiger Beschluss Parteivorstand der LINKEN am 15.05.2021

Jüngste Proteste in Kolumbien werden von der Regierung gewaltsam unterdrückt und Menschenrechte systematisch verletzt. Die Proteste richten sich gegen die geplante und inzwischen zurückgenommene Steuerreform, die vor allem mittlere und kleine Einkommen belastet hätte, und gegen die Gesundheitsreform. Die Menschen fordern außerdem ein „Noteinkommen,“ denn etwa 50% der Bevölkerung sind im informellen Sektor tätig und verlieren durch Corona und die Eindämmungsmaßnahmen ihr Einkommen.

Inzwischen hat das Militär die Kontrolle in den urbanen Zentren übernommen und geht gezielt gegen Demonstrierende vor. Die kolumbianische [NGO „Die Freiheit verteidigen“](#) dokumentiere (Stand 1.5.) folgende Menschenrechtsverletzungen:

111 Personen wurden verhaftet (49 davon in Barranquilla, 40 in Bogota, 6 in Medellín, 6 in Soacha, 3 in Pereira, 3 in Bucaramanga und 4 bisher nicht identifizierte Fälle. Die Verhaftungen wurden mehrheitlich entgegen der Gesetzeslage durchgeführt.

56 Personen wurden verletzt, mutmaßlich durch Polizei/ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios - eine kolumbianische Polizeieinheit, die im Jahr 1999 zur Aufstands-Bekämpfung gebildet worden ist.)

5 Personen wurden ermordet. Mutmaßlich im Zusammenhang mit dem andauernden Protest

6 Frauen wurden sexuell belästigt

9 Menschenrechts-Verteidiger:innen wurden von der Polizei in ihrer Arbeit gehindert.

Die Gewalt in Kolumbien ist schon lange äußerst besorgniserregend. Im Jahr 2016 sollte ein Friedensvertrag zwischen der Regierung Kolumbiens und der FARC-EP den 50 Jahre alten bewaffneten Konflikt beenden. Das Abkommen beinhaltete die Entwaffnung der Guerilla, ihre Eingliederung in die Gesellschaft, sowie die Gründung der FARC als politische Partei. Insbesondere nach der Wahl von Iván Duque wurde die Umsetzungen der Vereinbarungen gestoppt und das Morden geht weiter. Seit der Unterzeichnung des Abkommens wurden in Kolumbien mindestens 1084 Menschen getötet: Umwelt- und Sozialaktivist:innen, Journalist:innen, ehemalige Kämpfer:innen, die sich für den Frieden einsetzen. Insbesondere in ländlichen Gebieten herrscht schon lange Gewalt, paramilitärische Gruppen töten willkürlich und bleiben ungestraft. Einige der ehemalige FARC-Kämpfer:innen bewaffneten sich deshalb erneut und der blutige Konflikt wird – von der internationalen Gemeinschaft weitestgehend unbemerkt – weitergeführt.

Deshalb fordern wir:

Die in der Verfassung verankerten Vereinbarungen des Friedensabkommens müssen endlich umgesetzt werden. Die Gewalt gegen Demonstrierende und Aktivist:innen muss sofort eingestellt, restlos aufgeklärt werden und Menschenrechte gewahrt werden. Die Sicherheitsgarantien für ehemalige FARC-Kämpfer und die linke Opposition in Kolumbien müssen endlich eingehalten werden und sich alle Seiten an die Friedensvereinbarungen halten. Die Bundesregierung fordern wir auf, sich mit diplomatischen Mitteln für ein Stopp der Gewalt gegen Demonstrierende, die Wahrung der Menschenrechte und die Umsetzung des Friedensvertrages einzusetzen.

(Traducción al español por el PDAI)

Resolución unánime de la Ejecutiva del Partido DIE LINKE el 15.05.2021

Las recientes protestas en Colombia han sido reprimidas violentamente por el gobierno y se han violado sistemáticamente los derechos humanos. Las protestas se dirigen contra la reforma fiscal prevista, entretanto retirada, que habría gravado sobre todo a las rentas medias y pequeñas, y contra la reforma sanitaria. La población también reclama un "ingreso de emergencia", ya que cerca del 50% de la población trabaja en el sector informal y está perdiendo sus ingresos debido a Corona y a las medidas de contingencia.

Mientras tanto, los militares han tomado el control en los centros urbanos y están atacando a los manifestantes. La ONG colombiana "Defendiendo la Libertad" documentó las siguientes violaciones de los derechos humanos (al 1 de mayo):

Fueron detenidas 111 personas (49 de ellas en Barranquilla, 40 en Bogotá, 6 en Medellín, 6 en Soacha, 3 en Pereira, 3 en Bucaramanga y 4 casos aún no identificados. La mayoría de las detenciones se realizaron en violación de la ley.

56 personas resultaron heridas, presumiblemente por la policía/ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios - unidad policial colombiana formada en 1999 para luchar contra la insurgencia).

Cinco personas fueron asesinadas. Presumiblemente en relación con la protesta en curso.

6 mujeres han sido acosadas sexualmente

9 defensores de los derechos humanos han sido impedidos de hacer su trabajo por la policía.

La violencia en Colombia es desde hace tiempo motivo de gran preocupación. En 2016, un acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP debía poner fin al conflicto armado de 50 años. El acuerdo incluía el desarme de los guerrilleros, su incorporación a la sociedad y la creación de las FARC como partido político. Especialmente después de la elección de Iván Duque, la implementación de los acuerdos se detuvo y la matanza continúa. Desde la firma del acuerdo, al menos 1084 personas han sido asesinadas en Colombia: Activistas medioambientales y sociales, periodistas, excombatientes que trabajan por la paz. Especialmente en las zonas rurales, la violencia se mantiene desde hace mucho tiempo, los grupos paramilitares matan arbitrariamente y quedan impunes. Por ello, algunos de los antiguos combatientes de las FARC volvieron a armarse y el sangriento conflicto continúa, en gran medida sin que la comunidad internacional se dé cuenta.

Por lo tanto, exigimos:

Los acuerdos del acuerdo de paz, que están anclados en la constitución, deben ser finalmente implementados. Hay que poner fin inmediatamente a la violencia contra manifestantes y activistas, llevar a cabo una investigación completa y respetar los derechos humanos. Las garantías de seguridad para los excombatientes de las FARC y la oposición de izquierdas en Colombia deben respetarse finalmente y todas las partes deben cumplir los acuerdos de paz. Pedimos al gobierno alemán que utilice medios diplomáticos para poner fin a la violencia contra los manifestantes, que respete los derechos humanos y que aplique el acuerdo de paz.